

Profundización del modelo agropecuario durante la posconvertibilidad y acción política del empresariado: el caso de la Federación Agraria Argentina.

Francisco Javier Monterubbianesi.

Cita:

Francisco Javier Monterubbianesi (2013). *Profundización del modelo agropecuario durante la posconvertibilidad y acción política del empresariado: el caso de la Federación Agraria Argentina*. X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-038/180>

X Jornadas de sociología de la UBA
20 años de pensar y repensar la sociología.
Nuevos desafíos académicos, científicos y
políticos para el siglo XXI, 1 a 6 de Julio de 2013

Mesa 12: “Una mirada socioeconómica a la Argentina de la posconvertibilidad”

Título: Profundización del modelo agropecuario durante la posconvertibilidad y acción política del empresariado: el caso de la Federación Agraria Argentina.

Autor: Monterubbianesi, Francisco Javier, IDAES-UNSAM

Profundización del modelo agropecuario durante la posconvertibilidad y acción política del empresariado: el caso de la Federación Agraria Argentina.

Introducción

Durante la posconvertibilidad, muchas de las características de la estructura agraria heredada de los '90 se han profundizado. El modelo sojero ha avanzado, batiendo records de superficie sembrada y toneladas exportadas; y, alrededor del mismo, se han sucedido diversos conflictos entre el Estado y las entidades representantes de los empresarios del agro, siendo el de mayor visibilidad y difusión mediática la puja por la Resolución 125 del año 2008.

La Federación Agraria Argentina (FAA), como entidad representante de pequeños y medianos empresarios del agro, ha tenido una acción política activa a lo largo del período, intentando influir en la toma de decisiones por parte del Estado.

El objetivo de nuestra investigación es analizar y explicar el posicionamiento y la estrategia política de la FAA respecto del gobierno nacional desde el 2003, año de la asunción de Néstor Kirchner, hasta el conflicto de 2008, considerando el impacto de los cambios económicos en la naturaleza de sus asociados y en la redefinición de objetivos y proclamas por parte de la entidad.

La elección de esta entidad obedece a que representa a un sector de pequeños y medianos empresarios del agro que, entendemos, han sufrido una significativa transformación económica. Como hipótesis, sostenemos que la profundización de un modelo agropecuario con determinadas características ha modificado la inserción productiva del asociado tradicional de la FAA, y en base a estas transformaciones se pueden explicar las distintas estrategias y posicionamientos de esta entidad.

El análisis se realizó a partir de las publicaciones de *La Tierra* -órgano de prensa de la entidad-, los comunicados de su sitio web, y sus Memorias y Balances. Las transformaciones económicas se investigaron a partir de la lectura de material bibliográfico y de informes estadísticos del INDEC y del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca¹.

Marco conceptual para el abordaje de la acción política

La acción política empresaria es definida por Beltrán (2012) como aquella *“orientada a intervenir en el campo político con el fin de influir sobre las decisiones de los agentes gubernamentales; se trata de aquellas prácticas dirigidas hacia el Estado, porque es en relación al Estado que los empresarios definen los repertorios que ponen en juego en cada contexto en particular”* (Beltrán, 2012: 73).

Dentro de la acción política, se puede distinguir aquellas prácticas llevadas a cabo por los empresarios a título individual y, por otro lado, las acciones colectivas donde confluyen los empresarios en una estrategia conjunta. El

¹ En la presente ponencia se exponen algunos ejes del trabajo realizado en el marco del taller Carácter social de los procesos económicos, Cátedra Arceo-Khavisse, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

primer tipo corresponde principalmente a los empresarios que cuentan con canales directos de llegada al Estado. La acción colectiva, en cambio, se canaliza generalmente a través de asociaciones o entidades representativas (Dossi, 2012)

En relación a este punto, aclaramos que al tomar como objeto de estudio a la FAA, estamos frente a una entidad considerada representante de un sector del pequeño y mediano empresariado nacional. Pese a que la base estructural de sus asociados se ha transformado en los últimos años, en el presente trabajo consideramos que no se puede analizar su acción política utilizando las mismas categorías que estudian a una entidad representante de los actores socioeconómicos dominantes.

Sidicaro (2005), explica que los actores socioeconómicos predominantes tienen la capacidad para *“1) gravitar sobre la reproducción y la orientación de la economía nacional de cada período, y 2) para condicionar u orientar la toma de decisiones estatales”* (Sidicaro, 2005: 20). Es decir, gracias a su posición en la estructura productiva detentan el poder de incidir de manera trascendente en el rumbo de la economía, actuando directamente sobre las relaciones productivas o mediante una acción política apoyada en canales privilegiados de llegada al Estado. Ahora bien, los pequeños y medianos empresarios, no tienen la capacidad de poner en riesgo la actividad económica en su conjunto y de influenciar, a partir del manejo de su capital, a los gobiernos de turno para postergar políticas que vayan en su desmedro. Por lo tanto, la particularidad de los pequeños y medianos empresarios es su restricción respecto de la capacidad de llegada en la esfera estatal para direccionar el rumbo económico. Esta limitación incidirá no sólo en la manera en que se vinculan con los organismos públicos sino también en las alianzas que puedan establecer con otras organizaciones (Lissin, 2009).

A su vez, el tipo de Estado también incide en la acción política desplegada por el empresariado. Como explica Beltrán (2012), *“el marco institucional del Estado delimita el rango de las acciones posibles e impacta sobre el tipo de objetivos políticos posibles de ser trazados por los empresarios”* (Beltrán, 2012: 90).

A modo de resumen, retomamos los ejes que Lissin (2009) estudia al analizar la acción de las entidades empresarias: *“a) Las relaciones-vinculaciones que establecen con el Estado b) sus posicionamientos, entendidos como las expresiones públicas que realizan a partir de sus discursos, y c) las estrategias, medidas de fuerza o de protesta y a partir de ellas cómo se articula y realiza la acción colectiva de estos estratos productivos. Todas ellas sin perder de vista los rasgos característicos del contexto histórico-político donde las acciones se construyen, se insertan y se desarrollan”* (Lissin, 2009: 17).

Acorde a lo expuesto hasta aquí, la acción política de la FAA será analizada en el presente trabajo teniendo en cuenta:

- El rol fundamental del Estado y la necesidad de las entidades empresarias de influir en las decisiones públicas.
- Las limitaciones de las entidades del pequeño y mediano empresariado para cumplir sus objetivos debido a su posición en la estructura productiva.
- La necesidad de hacer visibles sus demandas en el espacio público expresando su posición y manifestándose en acciones concretas

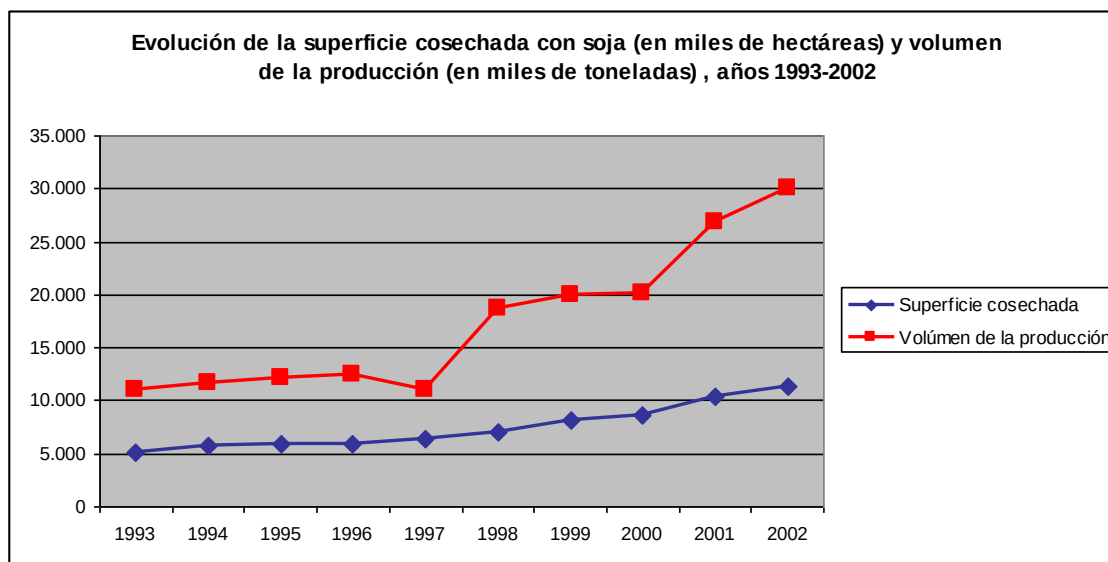
- (medidas de fuerza, protestas) y, en algunas oportunidades, aliarse con otras corporaciones.
- La importancia del contexto económico y político imperante para definir sus demandas, su posicionamiento y su estrategia política.

La profundización del modelo sojero

Cuando hablamos de profundización del modelo sojero, nos referimos al afianzamiento de una estructura productiva heredada de décadas pasadas. La producción de soja tuvo su gran salto a partir de 1996 cuando se liberó el comercio de la soja transgénica, provocando un fuerte aumento de la rentabilidad y de la superficie sembrada con este cultivo. La incorporación de la semilla transgénica Roundup Ready (RR), producida monopólicamente por la empresa transnacional Monsanto permite practicar la siembra directa y eliminar las malezas sin que se perjudique el cultivo, gracias a su capacidad para resistir al agrotóxico glifosato. Además, la soja transgénica puede producirse en zonas que hasta entonces no eran propicias para la agricultura, expandiendo la frontera agrícola y dando mayor impulso a la sojización del territorio (Giarracca y Teubal, 2009).

En el *gráfico n° 1*, se puede observar que la producción de soja tuvo un avance espectacular entre los años 1993-2002, aumentando a más del doble la superficie cosechada y casi triplicando el volumen de la producción.

Gráfico n°1



Elaboración propia en base a información de la SAGPyA.

Este “boom” repercutió significativamente en el sector agropecuario: hubo un pasaje de la producción de alimentos básicos de consumo popular a la producción de soja transgénica, un producto casi exclusivamente de exportación.

Lógicamente, la estructura social del agro se vio modificada, ya que la soja es un cultivo apto para aquellos que cuentan con el capital, la capacitación y la superficie necesaria para hacer sustentable la producción (Lattuada, 2001). Esto explica que durante los '90 se haya dado un hecho de suma relevancia: se registró un período de aumento de la producción y de volumen de exportaciones y a su vez se aceleró el proceso de concentración y exclusión que afectó a pequeños y medianos productores y a los trabajadores del sector. El aumento de la escala necesaria para la reproducción y crecimiento de las empresas agropecuarias y la necesidad de acceder a las nuevas tecnologías dejaba dos opciones a los pequeños y medianos empresarios del agro: recurrir al contratista² o solicitar créditos (para alquilar tierras o maquinaria).

Estas opciones podían significar soluciones temporales para algunos pequeños y medianos productores que no podían trabajar su propia tierra, pero también un incremento de sus costos, del endeudamiento³ y la consecuente pérdida de competitividad frente a los grandes propietarios. Estos últimos, o bien tenían su propia maquinaria o, caso contrario, obtenían mejores márgenes para negociar el arrendamiento. Pero además, muchos grandes propietarios comenzaron a trabajar las tierras de aquellos que no podían hacerlo por sus propios medios. Este negocio lo compartían con los pools de siembra⁴ y fondos de inversión (Basualdo, 2006).

Por lo tanto, los pequeños y medianos empresarios del agro se vieron en la necesidad de acudir a los sectores más concentrados del ámbito rural para que trabajaran sus tierras, hecho que implicó no sólo una transformación productiva, sino también cultural. Según Lissin (2010), se modificó *“la identidad del chacarero tradicional de la región pampeana asociado a la FAA acostumbrado a que a partir del esfuerzo y su presencia en la tierra podía alcanzar el bienestar de su núcleo familiar (...) El impulso del agronegocio, sumado al ingreso de nuevos y poderosos actores volvió necesaria, con el objetivo de subsistir en el sector, una suerte de transformación tendiente a la profesionalización de sus labores cotidianas”* (Lissin, 2010: 22).

Así como hubo pequeños y medianos productores que pudieron sumarse al modelo sojero, otros se vieron definitivamente excluidos del sector agropecuario al perder la propiedad sobre su tierra. Algunas de estas circunstancias pueden analizarse mediante la lectura del *gráfico n°2*. Las cifras censales demuestran que entre los años 1988 y 2002 la cantidad de explotaciones agropecuarias (EAP) se redujo en un 21%. Pero esta proporción se debe a la desaparición de las pequeñas y medianas propiedades: las explotaciones de hasta 100 has. se redujeron en un 27% y las que van entre 100,1 y 500 has. lo hicieron en un 21%; mientras que las explotaciones mayores a estas dimensiones aumentaron su número en los años considerados.

² En la agricultura de contrato las empresas fuertemente capitalizadas en términos de maquinarias y equipos realizan la siembra y cosecha en tierras de terceros a cambio de un porcentaje sobre la producción obtenida o de un pago en efectivo

³ Hacia fines de 1999, los productores agropecuarios tenían deudas por 6.000 millones de pesos con el sistema financiero (de los cuales más del 60% se registraba con la banca oficial) y 3.000 millones de dólares con las empresas que proveían insumos (Lattuada, 2001).

⁴ Los pools de siembra (junto con los fondos de inversión agrícola) son las formas que adquirió el capital financiero que desde mediados de los '90 arrienda tierras aprovechando las nuevas condiciones de rentabilidad en el sector.

Además de la desaparición de propiedades de pequeñas y medianas dimensiones, hubo una mayor concentración en la posesión de la tierra. En 1988, el 78% de las EAP tenía hasta 500 has. y controlaban el 16% de la superficie, en 2002 tenía esta dimensión el 74% de las explotaciones y controlaban el 13% del territorio. La contracara de este proceso fue el incremento de la posesión de los grandes terratenientes: las EAP de más de 500 has. aumentaron su proporción de un 12% a un 15% entre 1988 y 2002, y el control sobre la superficie pasó de un 84% a un 87%. Por lo tanto, afirmamos que se produjo una transferencia de tierras hacia una escala de explotaciones agropecuarias de mayor envergadura.

Gráfico nº 2

Estratos de tamaño (hectáreas)	1988				2002			
	EAP		Superficie		EAP		Superficie	
	N	%	HA	%	N	%	HA	%
Hasta 5	57057	13,5	148003	0,1	40957	12,3	105895	0,1
5,1 a 25	84618	20,1	1189194	0,7	62497	18,7	892557	0,5
25,1 a 100	93271	22,1	5370992	3,0	68668	20,6	3950134	2,3
100,1 a 200	47083	11,2	6929412	3,9	34614	10,4	5150390	2,9
200,1 a 500	47772	11,3	15290154	8,6	40211	12,1	13113229	7,5
500,1 a 1000	21101	5,0	14870541	8,4	21441	6,4	15261566	8,7
1001 a 2500	15296	3,6	24230238	13,7	16621	5,0	26489560	15,2
2501 a 5000	5958	1,4	21461108	12,1	6256	1,9	22525345	12,9
5001 a 10000	3339	0,8	24513555	13,8	3373	1,0	24509127	14,0
Más de 10000	2862	0,7	63434199	35,8	2787	0,8	62810758	35,9
EAP SLD*	42864	10,2	-		36108	10,8		
Total	421221	100	177289393	100	333533	100	174808561	100

Elaboración propia en base a Lissin (2010).

**Sin Límites Definidos*

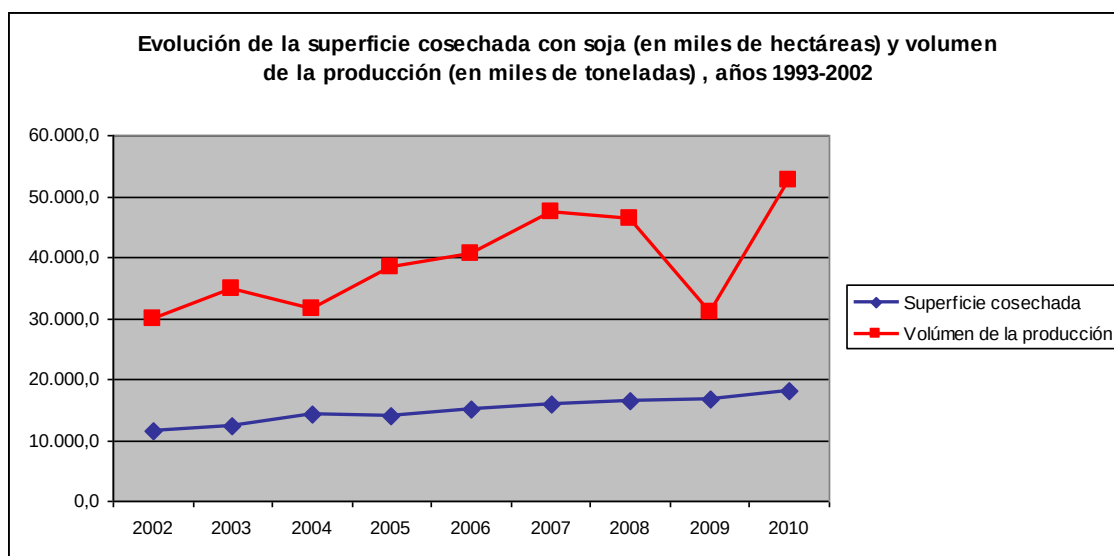
Luego de la crisis de 2001, el 1º de enero de 2002 Eduardo Duhalde asumió el Poder Ejecutivo por decisión de la Asamblea Legislativa. A los pocos días se puso fin a la convertibilidad mediante la devaluación de la moneda nacional. El abandono de la paridad de un peso por dólar significó el inicio de una nueva etapa en la Argentina, especialmente tras la victoria electoral de Néstor Kirchner en 2003 y la implementación de un tipo de cambio de dólar alto o competitivo.

Durante la posconvertibilidad el sector agropecuario continuó con su tendencia exportadora y manteniendo las principales características de la década anterior: la preponderancia de la soja, la pérdida de peso relativo de la ganadería, la concentración de la propiedad de la tierra y el afianzamiento de los pools de siembra. El sector agropecuario, gracias al nuevo tipo de cambio y a la suba de los precios internacionales de sus productos de exportación, entre otros factores, asistió a un crecimiento sostenido de su rentabilidad que alcanzó a los distintos estratos de su estructura (Arceo y Basualdo, 2009; González y Rodríguez, 2007, entre otros).

Pero por otro lado, muchos autores⁵ coinciden al afirmar que la nueva coyuntura macroeconómica no fue acompañada por un plan de desarrollo a largo plazo que transformara y ordenara la herencia productiva del imperio del capital financiero. La decisión central del kirchnerismo⁶ habría sido el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo.

Al no transformarse la estructura productiva se profundizó el modelo sojero heredado de los '90. Como se observa en el *gráfico n°3*, la superficie destinada a este cultivo siguió en aumento. Por su parte, el volumen de la producción continuó batiendo récords y, pese a la abrupta caída en la campaña 2008/2009, retomó su senda al año siguiente. Esta orientación al exterior, sumada a los precios internacionales favorables, arrojó como resultado una importante entrada de divisas al país.

Gráfico n°3



Elaboración propia en base a información de la SAGPyA.

Interesa remarcar que, tras la devaluación, aquellos pequeños y medianos empresarios del agro que sobrevivieron a la valorización financiera al lograr insertarse en la nueva lógica de la agricultura vieron sus ganancias

⁵ Entre los considerados aquí, podemos nombrar para el caso de la producción industrial a Azpiazu y Schorr (2010) y Fernández Bugna y Porta (2008); y para el caso del sector agropecuario a Lissin (2010) y Giarracca y Teubal (2010).

⁶ Si bien puede ser entendido de diversas maneras, aclaramos que en el presente trabajo nos referimos con "kirchnerismo" a la fuerza política a cargo del gobierno nacional durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

multiplicadas. El contratismo registrado en los '90 -es decir, los pequeños y medianos productores cediendo sus tierras a los grandes propietarios o pools de siembra- se convirtió en una constante. Como veremos más adelante, muchos de los representados por la FAA dejarían de trabajar su propia tierra y pasarían a ser un eslabón en la cadena productiva de los capitales más concentrados (Arceo y Basualdo, 2009).

La FAA en el inicio del kirchnerismo: apoyar al gobierno para promover el cambio

Tras el fin de la convertibilidad, la Federación utilizaba el término *agricultura sin agricultores* para resumir el impacto del neoliberalismo en la estructura agropecuaria. Esto significaba una tendencia a la agriculturización de la economía rural que cada vez necesita menos mano de obra y que podía prescindir de la presencia del productor trabajando la tierra.

La entidad realizaba un análisis muy crítico de la convertibilidad, principalmente porque entendían que muchos de sus asociados habían tenido que abandonar el sector (contaban más de 100 mil pequeños y medianos productores “desaparecidos”). Pero también eran conscientes de la existencia de un mapa heterogéneo de “sobrevivientes”: aquellos que debían pagar sus deudas, los que aún producían alimentos para la mesa de los argentinos y necesitaban de la pronta recuperación del golpeado mercado interno y quienes se habían sumado con éxito al “boom” de la soja. Además, criticaban la mudanza “irracional” de producciones tradicionales hacia este cultivo, que incluía el avance del contratismo como modo de trabajar la tierra y el surgimiento de actores como los pools de siembra.

Con el inicio de la posconvertibilidad, la FAA entendió que era el marco propicio para redefinir su acción política. El fin de los años '90 y los cambios en lo económico y político a nivel nacional, marcaban el momento preciso para las grandes transformaciones: detener el avance de la soja, recuperar a los productores que habían abandonado el sector, contener la migración de los jóvenes del interior a las grandes ciudades y limitar la extranjerización y la concentración de la tierra.

La devaluación como salida de la crisis era apoyada por la FAA en tanto fueran pesificados los créditos bancarios de los pequeños y medianos productores; pero además, el nuevo tipo de cambio mejoraría la competitividad de los rubros exportables y los precios internacionales eran favorables. Pero, a su vez, remarcaba que con la sola devaluación de la moneda no bastaba para recomponer al sector, ya que esto sólo cumpliría con los intereses de una parte de sus asociados: aquellos que se orientaban al mercado externo.

Al menos en los inicios de la posconvertibilidad, la entidad contemplaba a los asociados abocados al mercado interno, y adoptaba una postura crítica acerca del avance del monocultivo: *“Es necesario tener en cuenta a las economías extrapampeanas, a las producciones que tienen como principal destino el mercado interno y no medir la realidad del sector agropecuario solamente con los que trabajan con rubros exportables”* (FAA, Memorias y Balances, 2002/2003: 41).

Sin embargo, encontramos aquí un punto de contradicción interno para la entidad, fruto de la heterogeneidad de asociados a los que debía representar.

Si bien detener la *agricultura sin agricultores* iba en consonancia con la histórica defensa que la FAA realizaba del trabajo de la tierra y del mercado interno, el avance de la soja había transformado la naturaleza de sus asociados, y muchos pequeños y medianos productores veían sus ganancias multiplicadas con la estructura del agro tal cual estaba.

Por ende, la entidad estaba condicionada en sus reclamos: podía postular que se detuviera el avance de la soja, pero siempre y cuando no se perdiera rentabilidad. Esto significaba que el resto de las actividades -como la ganadería, la lechería, los cultivos regionales, etcétera- debía al menos acercarse a la ganancia de la soja.

El contexto al inicio de la gestión de Kirchner era de expectativa para la Federación. Además de los buenos augurios respecto a lo económico, el Estado se estaba abriendo a un mayor diálogo con el empresariado nacional. En el caso del agro, su producción estaba recuperando un rol central en la economía, en primer lugar por el retorno de las retenciones como modo de acaparar divisas por parte del Estado, y en segundo lugar por el mayor peso de los bienes agropecuarios en el costo de vida tras una década de fuerte presencia de los productos importados (Lattuada y Neiman, 2005).

La FAA optó por una estrategia que consistía en apoyar a la fuerza política que había asumido. Así, se establecieron buenas relaciones con los funcionarios de turno, que eran invitados como expositores en los Congresos anuales de la entidad.

El objetivo de la Federación era que el gobierno se hiciera eco de sus problemas relacionados a la política tributaria, el acceso al crédito y el endeudamiento. Pero a su vez, haría un planteo mucho más ambicioso, acorde a sus ideales históricos. La entidad proponía modificar la estructura agraria: repoblar el ámbito rural mediante el impulso de otras producciones más allá de la soja y terminar con la concentración y extranjerización del sector.

Pese a esto, cuando la FAA se sentaba a dialogar con el gobierno nacional no lo hacía para planificar el futuro de la nación, sino para resolver temas puntuales del agro. El principal asunto de reunión durante 2003 y 2004 fue el endeudamiento de los productores con el Banco Nación (BNA). Además, en estas negociaciones no participaban solamente la FAA y el gobierno nacional, sino que asistían siempre el resto de las corporaciones del agro: Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro.

Tras varias negociaciones, las soluciones sobre el tema del endeudamiento no convencían a la entidad. Este problema, sumado a la ausencia de políticas de fondo para la agricultura familiar y las economías extra-pampeanas fueron provocando un desencanto respecto del gobierno nacional.

En menos de dos años, a fines de 2004, la Federación organizó la primera movilización criticando al kirchnerismo. Si bien la consigna de aquel día era defender la soberanía de la tierra y en reclamar por otra política agropecuaria, el tema de fondo que inquietaba a la FAA era la mala perspectiva que se tenía para el año 2005 respecto de los precios internacionales.

Inmediatamente, la cuestión de los precios internacionales se ubicó en primera plana dentro de la Federación. En la edición de *La Tierra* de diciembre de 2004 se explicaba: *“En 18 meses de gobierno no se ha modificado la política agropecuaria. Tras la euforia post-devaluación los pequeños y medianos productores están volviendo a ser económicamente inviables (...) Esto quedó al*

desnudo con la caída de los precios agrícolas internacionales, agravada por la fuerte presión fiscal (retenciones a la exportación y otras) (...) No hay posibilidades objetivas de que el gobierno argentino tome alguna decisión en términos de descomprimir la fuerte presión impositiva que pesa sobre el sector agrícola” (La Tierra, diciembre de 2004: 9).

El llamado de atención de los precios internacionales

Pese a reconocer la sojización como un peligro para el futuro de la nación y de los chacareros, cuando se esperaba una caída del precio internacional de este producto, el problema de las retenciones retomó la centralidad dentro de la entidad. Las retenciones eran cuestionadas, no sólo por el porcentaje aplicado que consideraban elevado (llegaban al 23,5% para el caso de la soja), sino también por su carácter de impuesto regresivo al no diferenciarse a los pequeños y medianos productores de los grandes, y porque lo asociaban directamente al pago de la deuda externa. Desde su óptica, para cumplir con los organismos financieros internacionales, el gobierno nacional debía procurar un superávit comercial y una fuerte presión tributaria, y el sector agropecuario debía soportar este peso.

El retorno del tema retenciones significaba una redefinición de la estrategia y posicionamiento de la FAA. En los primeros años de la gestión de Kirchner, la Federación había orientado su acción política a defender a aquellos asociados que no se habían sumado al mundo de la soja. Esta opción por la agricultura familiar y las economías extra-pampeanas tenía dos inconvenientes. Por un lado, provocaba distorsiones al interior de la entidad, ya que muchos de sus asociados formaban parte del agronegocio. Por el otro, la tendencia era la profundización y extensión del agronegocio, y la FAA quería limitarlo. El costo de querer detener el avance de la soja era demasiado alto, más aun cuando la política agropecuaria del kirchnerismo no apuntaba a la transformación pretendida por la FAA.

Durante 2005 la FAA llevó su actividad gremial a las calles, organizando movilizaciones y tractorazos pidiendo principalmente soluciones para el endeudamiento y la baja de retenciones. Del otro lado, el gobierno nacional elegía redoblar la apuesta aumentando en julio de 2005 los derechos de exportación de leche y quesos del 5 al 15%. El análisis que hacía la entidad era que la gestión de Kirchner consideraba que, debido a las condiciones favorables que presentaba el campo, los productores (sean pequeños, medianos o grandes) debían hacerse cargo de dos cuestiones, aún ante la caída de los precios internacionales: la deuda externa y la inflación. Mientras tanto, un tercero en discordia, los verdaderos “ganadores” de la estructura agraria, no eran afectados por el Estado. Este grupo “beneficiado” lo conformaban las empresas que industrializan alimentos, los hipermercados, los frigoríficos, los molinos, los pools de siembra, las empresas semilleras, etc.

Esta postura le permitiría a la entidad estar en sintonía con sus pares sectoriales para hacer frente a las medidas “anti-campo”, aunque esto aún no se expresaba en una alianza como sería la de 2008. En consecuencia, la FAA se perdía de poder diferenciar sus demandas respecto de los grandes productores nucleados en la SRA y CRA pero, en cambio, podía superar el

límite para ser escuchada por las altas esferas estatales que le imponía el hecho de ser una entidad del pequeño y mediano empresariado argentino.

El quiebre definitivo con el gobierno nacional: la Resolución 125

La FAA fue cambiando su posicionamiento respecto del gobierno nacional al ser evidente que transformar el agro iba en contra de los intereses de parte de sus asociados, y que el kirchnerismo no resignaría los frutos del mercado de la soja. La profundización del modelo agropecuario por un lado transformaba la base social de la Federación, y otro lado evidenciaba que las antiguas proclamas de la entidad vinculadas a los cambios estructurales estaban fuera de época.

Desde lo discursivo, la Federación seguirían apelando a las grandes reformas, pero los temas centrales en su acción política serían defender la rentabilidad de los productores, particularmente de quienes exportaban. Esto se manifestó en dos conflictos vinculados al comercio exterior que marcaron dos quiebres en su acción política: la disputa por la carne, que comenzó a fines de 2005, y por las retenciones móviles, que se inició en marzo de 2008.

Desde el inicio de la gestión de Kirchner, la FAA había intentado radicalizar las políticas referidas al agro. Su idea de un Estado fuerte e interventor con reformas estructurales, alejaba a la Federación de la SRA y CRA, cuyo objetivo era obtener el mayor margen de ganancia dentro del modelo establecido. La FAA podía aceptar las retenciones si eran utilizadas dentro de lo que consideraban correcto (para fines sociales o proyectos agropecuarios), mientras que, según esta entidad, las corporaciones “liberales” las rechazaban por el simple hecho de ser “mezquinos”.

En el 2005 se revirtió este panorama. Este año se dio el nivel más alto de exportación de carne vacuna de las últimas décadas y el consumo interno per cápita más bajo desde mediados del siglo XX, pese a la recuperación del empleo y del salario real. La oferta de ganado no resultaba suficiente para satisfacer la demanda compuesta por consumo interno y exportación, entonces la presión sobre los precios provocaba el incremento del valor de los principales cortes y una merma en el consumo local. Pero el problema de fondo no era simplemente el precio, sino el futuro del stock ganadero⁷ (Arceo y Basualdo, 2006). En este marco, el gobierno tomó una serie de medidas: aumentó las retenciones del 5 al 15 % (noviembre de 2005), congeló los precios por un año (enero de 2006), y suspendió las exportaciones por 180 días (marzo de 2006).

En esos meses, la SRA y CRA se enfrentaron al gobierno nacional, proponiendo como solución la importación de carne. En cambio, la FAA no creía que las medidas solucionaran el problema de fondo, pero se posicionaba a favor del gobierno nacional, por un lado por el espanto ante las propuestas de

⁷ Basualdo y Arceo (2006) explican que a pesar de que hubo un incremento sin precedentes de la rentabilidad ganadera, no se puso en marcha una fase de retención de ganado vacuno. Esto se debió a que el ciclo ganadero no está determinado únicamente por su rentabilidad absoluta, sino también por su rentabilidad respecto de la que obtiene la producción agrícola, al competir ambas por el uso del suelo de la región pampeana. Entre 2002 y 2004, los márgenes brutos relativos de la producción agrícola fueron más de tres veces mayores que los de la producción ganadera.

las corporaciones liberales, y por otro porque el gobierno lanzaría un plan ganadero para fortalecer el stock ganadero. Así lo relataba *La Tierra*: “*La puja por los precios de la carne volvió a poner en evidencia una vieja dicotomía: la idea de un Estado pasivo, espectador del dios mercado; o un Estado con capacidad de intervención que garantice la equidad y el crecimiento armónico (...) FAA acordó estabilización de precios porque el gobierno insinuó bases para comenzar a diseñar un verdadero proyecto de promoción ganadera*” (La Tierra, febrero de 2006: 1).

Finalmente, el ansiado plan ganadero se lanzó en julio de 2006, pero no cubrió las expectativas de la Federación. Mencionaban las siguientes críticas: no contemplaba a los minifundistas; era por cuatro años cuando la Federación preveía quince; se invertían 200 millones de pesos y la FAA había pensado en 1.000 millones; no establecía un precio mínimo; y no había una diferenciación tributaria progresiva.

Este hecho marcó un quiebre en la acción política de la Federación. Desde entonces ya no adoptaría posturas “oficialistas” con el fin de que sus propuestas sean consideradas. En paralelo, se acercaría a sus pares sectoriales. Así, en diciembre de 2006, la entidad convocó a un paro junto con CRA. En menos de un año, había pasado de formar filas en la lucha contra la inflación junto al gobierno nacional a marchar junto con los “liberales” que habían postulado que se debía importar carne.

El segundo suceso de suma relevancia ocurrió el 11 de marzo de 2008. Aquí se debilitaron definitivamente las relaciones entre el gobierno y la entidad cuando el Ministerio de Economía, mediante la Resolución 125, anunció una nueva suba en las retenciones con un triple objetivo: acaparar una mayor parte de la renta agrícola extraordinaria (dados los elevados precios internacionales); evitar que la soja siga avanzando sobre otros cultivos necesarios y sobre la tierra dedicada a la ganadería; y mantener estables los precios internos de los alimentos sin que sean afectados por la suba de los commodities en el mercado internacional. Las retenciones pasaban a ser móviles y se elevaban para la soja del 35 al 44,1%, para el girasol del 32 al 39,1% y se reducían las del maíz y el trigo en un 1 punto (Ortiz, 2010).

La Resolución 125 tenía características que hicieron que las protestas de la entidad federada en la calle fueran casi instantáneas, a diferencia de lo sucedido en otros conflictos donde en un principio adoptaron una posición más bien conciliadora. En primer lugar hay que considerar que las retenciones son un gravamen de carácter indirecto. Si bien efectivamente la retención la pagan los exportadores al Estado, es trasladada en su totalidad al productor agropecuario. Pero además, es un impuesto regresivo si no se diferencia a los pequeños y medianos productores de los grandes. Por último, la cosecha gruesa aún no había comenzado, por lo que se distorsionaba la ganancia estipulada por los productores (Giarracca y Teubal, 2010).

Así se inició el conflicto conocido mediáticamente como una pelea “gobierno versus campo”. Desde la óptica de la entidad, al igual que en años anteriores, el gobierno dejaba sin afectar a los verdaderos “ganadores” del sector agropecuario: los pools de siembra y las compañías semilleras. Si bien estos actores socioeconómicos estaban sacando provecho de las circunstancias favorables del sector, vale realizar dos aclaraciones. En primer lugar, como explican Arceo y Basualdo (2009), había grandes terratenientes que formaban parte de los pools de siembra, por lo que la dicotomía productores tradicionales

versus capital extranjero oportunista, era una construcción que distorsionaba la realidad del agro. En segundo lugar los asociados de la FAA eran un eslabón en la cadena productiva que incluía a los grandes exportadores y pools de siembra, y en los últimos años, la entidad se había volcado por sacar el mejor provecho de esta posición antes que de intentar revertirla, como lo demuestra el impulso que daba a la Ley de Arrendamientos, que proponía regular los contratos, naturalizando su posición como rentistas.

Según la FAA, el paro agropecuario no se trataba simplemente de un reclamo por la baja en las retenciones – esto hubiera ido en contra de su tradicional discurso-, sino que era una verdadera rebelión del interior del país comparable con el Grito de Alcorta: *“La medida de fuerza dispuesta por la FAA y el resto de la entidades tras la suba de las retenciones, dio paso a una verdadera rebelión agraria. Pequeños y medianos productores estuvieron en las rutas de todas las provincias junto a vecinos, obreros, comerciantes e intendentes. El interior se puso de pie para pedir una nueva política de desarrollo para nuestro país”* (La Tierra, abril de 2008: 31).

Si bien las alianzas entre las entidades no eran una novedad, la denominada Mesa de Enlace fue sorpresiva tanto por su duración como por la cohesión alcanzada. Gracias a esta alianza, la FAA había tenido la posibilidad de contar con un gran apoyo de grupos ajenos al sector agropecuario y una visibilidad constante en los medios de comunicación. A cambio perdía la autonomía que en otras épocas le permitía criticar la concentración de la tierra (ahora solo podían apuntar a los pools de siembra pero no a la SRA o CRA) y el avance del monocultivo.

Conclusiones

Los primeros años de la posconvertibilidad, donde la FAA defendía la agricultura familiar y se reclamaba una *agricultura con agricultores*, se esfumaron en una alianza con los grandes terratenientes en defensa de la rentabilidad de la soja. En este marco, la FAA perdía toda posibilidad de diferenciar sus históricas demandas, de la frase *no todo el campo es lo mismo* que empleaban en los inicios de la posconvertibilidad al luchar por un política diferenciada para las economías extra-pampeanas, la entidad ubicaba tras el reclamo por las retenciones a todo el sector agropecuario y a la sociedad en general con el lema *todos somos el campo*.

Tras la convertibilidad, el planteo de la entidad hacía referencia a la necesidad de transformar la estructura agropecuaria de raíz, incluso, detener el avance de la soja. Actualmente, la defensa de la rentabilidad de los productores de soja es el punto que en mayor medida provoca la atención de la FAA. Tal es así que esta defensa la llevó a conformar una Mesa de Enlace, que se mantiene vigente hasta el día de hoy, con sectores con los que, en otras épocas, mostró importantes diferencias.

En este trabajo, se sostiene como hipótesis que los cambios en la base material de los pequeños y medianos productores en los '90 y su profundización en la posconvertibilidad, tuvieron consecuencias en la composición de los asociados a la FAA y en su acción política. La vinculación con los grandes terratenientes y pools de siembra, y el avance del monocultivo,

modificaron la naturaleza del chacarero tradicional, y en consecuencia sus estrategias y posicionamientos.

Creemos que la FAA representa hoy a un heterogéneo grupo de pequeños y medianos productores, entre ellos quienes ven sus ganancias multiplicadas gracias al agronegocio. Las antiguas banderas de transformación profunda que caracterizaron antiguamente a esta entidad han quedado obsoletas ante la profundización del modelo y la transformación social de su base de asociados.

Bibliografía

- Arceo, Nicolás y Basualdo, Eduardo (2009): *Características estructurales y alianzas sociales en el conflicto por las retenciones móviles*. En *La crisis mundial y el conflicto con el agro*. Siglo XXI Editores, Buenos Aires.
- Arceo, Nicolás y Basualdo, Eduardo (2006): *Evolución y situación actual del ciclo ganadero en la Argentina*. En *Realidad Económica*, N° 221, IADE.
- Azpiazu, Daniel y Schorr, Martín (2010): *Hecho en argentina. Industria y economía, 1976-2007*. Siglo XXI Editores, Buenos Aires.
- Basualdo, Eduardo (2006): *Estudios de historia económica argentina*. Siglo XXI Editores, Buenos Aires.
- Beltrán, Gastón (2012): *Las prácticas del poder. Discusiones en torno al problema de la acción política empresarial*. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, N° 70.
- Dossi, María V. (2012): *Debates sobre la acción empresarial organizada: aportes para la elaboración de la acción corporativa empresarial*. En *Papeles de trabajo*, Año 6, N° 9.
- Fernández Bugna, Cecilia y Porta, Fernando (2008): *El crecimiento reciente de la industria argentina. Nuevo régimen sin cambio estructural*. En CEPAL, *Crisis, recuperación y nuevos dilemas. Economía argentina 2002-2007*. Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.
- González, Mariana y Rodríguez, Javier (2007): *El auge agroexportador y el sector agropecuario argentino*. En *Anuario EDI*, N°3. Ediciones Luxemburg, Buenos Aires.
- Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (2009): *Paro agrario: crónica de un conflicto alargado*. En *Realidad Económica*, N° 237, IADE.
- Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (2010): *Del paro agrario a las elecciones de 2009*. Antropofagia, Buenos Aires.
- Lattuada, Mario y Neiman, Guillermo (2005): *El campo argentino. Crecimiento con exclusión*. Capital Intelectual, Buenos Aires.
- Lattuada, Mario (2001): *El crecimiento económico y el desarrollo sustentable en los pequeños y medianos productores agropecuarios argentinos de fines de siglo XX*. Disponible en: <http://www.rlc.fao.org/foro/institucionalidad/PDF/Lattuada.pdf>.
- Lissin, Lautaro (2009): *La construcción histórica de la acción colectiva del pequeño-mediano empresariado argentino en el período 1998-2002. Los casos de la Federación Agraria Argentina y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina*.

Directores: Dr. José Nun y Dr. Martín Schorr. Universidad Nacional de San Martín, Instituto de Altos Estudios Sociales, Maestría en Sociología Económica.

- Lissin, Lautaro (2010): *Federación Agraria Hoy. El campo argentino en discusión*. Capital Intelectual, Buenos Aires.
- Ortiz, Sebastián (2010): *La patria terrateniente*. Ediciones Continente, Buenos Aires.
- Sidicaro, Ricardo (2005): *Los tres peronismos*. Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

Documentos y archivos de la Federación Agraria Argentina

- Federación Agraria Argentina: La Tierra, años 2002-2009.
- Federación Agraria Argentina: Memorias y Balances, años 2002-2009.
- Sitio web de la Federación Agraria Argentina (www.faa.com.ar)